



**AUD. PROVINCIAL SECCION CUARTA
OVIEDO**

SENTENCIA: 00166/2024

Modelo: NI0250
C/ CONCEPCION ARENAL N° 3 - 3

Telefono: 985968737 **Fax:** 985968740
Correo electrónico:

Equipo/usuario: ARM

N.I.G. 33033 41 1 2022 0000940
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 000084 /2024
Juzgado de procedencia: JOO.IA.INST.E INSTRUCCION N.2 de LENA
Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000517 /2022

Recurrente: UNICAJA, S.A.
Procuradora: MARIA CONSUELO MORALES SUAREZ
Abogada: ALEJANDRA SEVARES CARAS
Recur.idos: [REDACTED]
Procurador: TOMAS GARCIA-COSTO ALVAREZ
Abogado: JOSE ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO

NUMERO 166

En Oviedo, a diez de abril de dos mil veinticuatro, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Don Javier Alonso Alonso y Dona Raquel Blazquez Martin, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de apelación numero **84/2024**, procedente del juicio ordinario numero 517/2022 del Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Lena, interpuesto por **UNICAJA BANCO**



PRINCIPADO DE
ASTURIAS

S.A., demandado en primera instancia, contra [REDACTED] demandantes en primera instancia, ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada o.a RAQUEL BLAZQUEZ MARTIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Lena dictó sentencia el veinte de noviembre de dos mil veinti tres en el juicio ordinario nº 517/2022 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

*"ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales, Don Tomas Garcia-Cosio Alvarez, en nombre y representación de [REDACTED] frente a la entidad **UNICAJA BANCO S.A.**, **SE DEBE CONDENAR Y SE CONDENA** a la demandada a reembolsar a los demandantes los 19. 999 euros que le fueron defraudados, con sus intereses legales desde su primera reclamación, el 10 de junio de 2.022 (documento 9). Conimposición de costas a la parte demandada.n*

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que se dio el preceptivo traslado. Se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial y se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día 9 de abril de dos mil veinticuatro.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen del litigio. Planteamiento del recurso.

1. La sentencia de primera instancia estimó la demanda formulada por [REDACTED]



[REDACTED] y condenó a Unicaja Banco al pago de 19.999 € más los intereses legales devengados desde la reclamación extrajudicial, así como al abono de las costas procesales. La sentencia consideró probado que los demandantes habían sido víctimas de una estafa cometida bajo la modalidad conocida como *smishing* por el importe objeto de condena y que no concurría negligencia grave en su actuación, apreciando por el contrario que el banco demandado no había acreditado el cumplimiento de las deberes de diligencia que le son exigibles en la gestión de las operaciones de pago.

2. La demandada ha formulado recurso de apelación en el que alega error en la valoración de las pruebas y, en particular, que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta que los demandantes primero facilitaron los datos de su tarjeta de crédito, sin razón alguna, en el enlace remitido a través del SMS fraudulento y, segundo, que recibieron un mensaje de Unicaja Banco con una clave para autorizar una vinculación de un nuevo dispositivo e introdujeron dicha clave sin mediar engaño alguno, lo que permitió la consumación de la estafa, puesto que el delincuente ya recibió en su dispositivo las claves para autorizar las dos transferencias controvertidas. En síntesis, sostiene la recurrente, la disposición patrimonial fue posible por el incumplimiento de los demandantes del deber de custodia de sus claves bancarias.

3. Los demandantes se han opuesto al recurso de apelación.

SEGUNDO.- Circunstancias de hecho relevantes para la resolución del recurso de apelación

1. Se expondrán a continuación los hechos que se consideran más relevantes para la resolución del recurso, que han quedado acreditados a través de los documentos y pruebas que se especificaran en cada caso y/o de la admisión de las partes litigantes.

2. Es un hecho no controvertido que el 8 de junio de 2022 a las 20:35 h, [REDACTED] recibió en su teléfono móvil un SMS procedente, en apariencia, de Liberbank, entidad que por esas fechas estaba en pleno proceso de integración tecnológica con Unicaja Banco S.A. El SMS se agrupó con el hilo de otros SMS enviados por la entidad y contenía el siguiente texto:



"Hemos detectado un inicio de sesión inusual, su cuenta va a ser bloqueada por motivos de seguridad. Puede evitarlo aquí: <https://app.liberbank.-es.me>"

[REDACTED] clicó el enlace que aparecía en el SMS y accedió a lo que parecía el entorno web del banco demandado y que, en realidad, era una réplica fraudulenta de la aplicación. Para ello introdujo en los espacios destinados a tal fin su identificación de usuario y su contraseña.

3. Aunque en la denuncia y en la reclamación a las que se haría referencia a continuación [REDACTED] manifestó que una vez dentro de la aplicación fraudulenta introdujera los datos que le fueron requeridos para restablecer la operativa de la cuenta, y concretamente el número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el código EVE, no está acreditado que así fuera. Los documentos 2 y 3 de la contestación a la demanda **recogen las** trazas de operaciones y navegación realizadas por [REDACTED] el 8 de junio de 2022 (su número de usuario es [REDACTED] y en ellas no aparece la introducción de estos datos. Como luego se razonará, este extremo no es especialmente relevante, ya que no se realizó ninguna operación fraudulenta a través de la tarjeta de crédito.

4. Es un hecho no controvertido que la demandante recibió a continuación (20:37 h) otro SMS con el siguiente texto **"Unicaja Banco: Introduce la clave de seguridad 363375 para finalizar con la vinculación de dispositivo de Banca Digital"**, lo que efectivamente hizo. Aunque este dato no ha sido tenido en cuenta por la sentencia recurrida, se trata de un hecho relevante que, además de ser reconocido de contrario en el escrito de oposición al recurso, está probado a través de los documentos 2 y 3 de la contestación a la demanda. Este SMS, que procedía del canal legítimo del banco demandado, se genera por la operativa del delincuente, que vinculó otra dispositivo móvil a los productos bancarios de los demandantes, de modo que a través de él pueda realizar las operaciones fraudulentas, como ahora se verá.

5. A partir de ahí, el usuario ilícito contaba con las claves de acceso a los servicios de banca digital y con un dispositivo móvil en el que recibir las contraseñas OTP (one **password time**, de un solo uso) necesarias para ejecutar operaciones, y realizó las dos transferencias controvertidas.



La primera de ellas se ejecutó a las 20:42 h del 8 de junio de 2022, por importe de 10.000, a una cuenta de destino finalizada en 9197 con el concepto "*Rebellionn*". Para la ejecución de esta transferencia, que fue ordenada como transferencia inmediata, los servicios del banco enviaron una clave OTP al dispositivo vinculado ilícitamente, que aparece identificado como dispositivo móvil de la demandante era [REDACTED] mediante el sistema de notificaciones, no a través del canal SMS.

6. Esta operación fue comunicada a [REDACTED] a través del sistema de mensajería SMS auténtico de Unicaja, y fue este mensaje el que sirvió de alerta para que los demandantes intentaran comunicarse con el teléfono de atención al cliente y se dirigieran seguidamente al cuartel de la Guardia Civil de Pola de Lena para denunciar lo ocurrido. La diligencia de inicio de la denuncia penal está datada a las 21:52 horas del 8 de junio. Poco antes habían logrado contactar, después de varios intentos fallidos, con el Servicio de Atención al Cliente, desde donde se les indicó que debían denunciar los hechos y acudir a su sucursal al día siguiente. Pese a ello, la entidad bancaria no procedió al bloqueo de la cuenta. Del documento 3 de la contestación a la demanda se desprende que antes de ejecutar esta transferencia se había intentado realizar otra u otras (constan tres registros por igual importe en la hoja Excel) por importe de 12.000 €, que no llegaron a consumarse posiblemente porque el límite de disposición asociado por defecto a la cuenta de los demandantes era de 10.000 €.

7. La segunda transferencia fue realizada a las 00:26 horas del 9 de junio de 2022. Su importe fue de 9.999 €, la cuenta de destino una cuenta finalizada en 7045 y el concepto "*numero del diablo*". La entidad destinataria de estas transferencias fue, según se explica en la contestación a la demanda, PFS Card Ireland Limited Sucursal en España, que no ha dado ninguna respuesta al intento de retrocesión de las mismas.

Tras recibir la comunicación de esta segunda transferencia por el sistema de mensajería auténtico de Unicaja, los demandantes ampliaron la denuncia a las 11:49 h del 9 de junio ante el mismo puesto de la Guardia Civil.





8. Como ya se ha apuntado, los demandantes habían intentado hablar con el Servicio de Atención al Cliente de Unicaja antes de la presentación de la denuncia. El documento 6 de la demanda acredita seis llamadas realizadas desde el número [REDACTED] al número 91 0150100 a partir de las 21:17 h del 8 de junio y hasta las 8:48 h del día siguiente, así como otras 10 llamadas desde el teléfono [REDACTED], entre las 20:51 y las 23:06 horas del 8 de junio. No se discute que el número 910150100 es el teléfono de atención al cliente de la demandada y que los otros dos teléfonos corresponden a los móviles de los demandantes. La repetición de las llamadas da cuenta de la dificultad de establecer contacto real con el mencionado servicio.

9. La reclamación presentada por los demandantes el 10 de junio de 2022 fue rechazada por la demandada, que alegó en su contestación (documento 11 de la demanda) que aunque no se discutía que en el origen de las operaciones pudiera encontrarse una actuación fraudulenta ejecutada mediante la técnica del *smishing*, las operaciones habían sido autenticadas mediante sistema de autenticación reforzado con claves OTP enviadas a través de SMS de un solo uso al número de teléfono de la demandante [REDACTED] y que fueron debidamente contabilizadas sin error técnico alguno conforme a la normativa de servicios de pago. Sin embargo, no fue así: como ya se ha apuntado, de los documentos 2 y 3 de la contestación y del informe pericial aportado por los demandantes se desprende que las claves OTP no fueron enviadas al móvil de la demandante por SMS, sino al nuevo dispositivo fraudulentamente vinculado a través del canal de notificaciones de la entidad bancaria, que es distinto del canal SMS.

10. La entidad demandada se vio afectada por múltiples operaciones fraudulentas similares a la descrita en el mes de junio de 2022. No se discute la creación de una plataforma de afectados, según resulta del documento 14 de la demanda. El proceso de integración tecnológica entre Liberbank y Unicaja se había iniciado el 20 de mayo de 2022 (documento 15 de la demanda).

SEGUNDO.- El marco normativo aplicable a los hechos controvertidos





1. Esta sala ha tenido ocasión de analizar el marco normativo aplicable a hechos similares a los descritos en el fundamento de derecho anterior en las sentencias 624/2023, de 13 de diciembre, 142/2024, de 21 de marzo y 154/2024, de 3 de abril, en procedimientos en que la demanda se dirigía también contra Unicaja, por lo que hemos de estar al contenido de dichas resoluciones.

2. Se trataban en estas sentencias los fraudes informáticos cometidos mediante la captación de datos bancarios, induciendo a error a la víctima tras hacerse pasar por la propia entidad bancaria, a la que suplantan a través de correos electrónicos ("phishing"), llamadas telefónicas ("vishing") o bien a través de SMS fraudulentos como en este caso ("smishing"), con el objetivo final de que los clientes proporcionen sus datos y claves bancarias para acceder así a sus cuentas de forma fraudulenta. En particular, en el caso de la sentencia 142/2024, de 21 de marzo apuntábamos que ***"[L]a excusa frecuentemente utilizada [...] es la de informar sobre un acceso no autorizado a las cuentas online, de tal modo que los clientes alertados ante esa circunstancia, intentan comunicar con el banco cuando en realidad lo que hacen es facilitar sus datos bancarios al defraudador"***.

3. El marco normativo aplicable este tipo de operaciones fraudulentas se encuentra en el RDL 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, que sustituyó a la precedente Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que incorporó parcialmente a nuestro derecho los instrumentos europeos que se aprobaron a partir de 2015 para dar respuesta a la necesidad de generar un entorno más seguro y fiable para el desarrollo de unos servicios de pago sometidos a constantes innovaciones, tanto lícitas como ilícitas. La Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior y el Reglamento (UE) 2015/751 sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta, respondían a ese designio y su aprobación motivó la necesidad de incorporar al derecho español el nuevo marco regulatorio, lo que se verificó a través del citado RDL 19/2018.

(i) En dicha norma se regulan las obligaciones esenciales tanto del usuario de servicios de pago como de las entidades





que los pres tan. Desde el primer punto de vista, el usuario esta obligado (art. 41 a]) a utilizar el instrumento de pago de conformidad con las condiciones que regulen la emisión y utilización del mismo, y, en particular, a tornar *"todas las medidas razonables a fin de proteger sus credenciales de seguridad personalizadas"*.

Par su parte, el proveedor de esos servicios esta obligado (art. 42 .1 a]) a cerciorarse que de que *"las credenciales de seguridad personalizadas del instrumento de pago solo sean accesibles para el usuario de servicios de pago facultado para utilizar dicho instrumento [...]"*.

(ii) En las casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, el usuario esta obligado (art. 43.1) a comunicar su existencia *"sin demora injustificada, en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de dichas operaciones [...]"* y debe soportar (art. 46.1.3º) *"todas las perdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas si [...] ha incurrido en tales perdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por haber incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que establece el articulo 41"*.

(iii) Fuera de esos tres supuestos -ausencia de comunicaci6n en tiempo de las operaciones, actuaci6n fraudulenta del usuario y negligencia grave- la proveedora del servicio esta obligada a realizar la rectificaci6n del cargo (art. 43.1) y devoluci6n del importe (art. 45.1). Por un lado, ante la negaci6n por el usuario de haber autorizado la operaci6n o la afirmaci6n de que la misma fue realizada de manera incorrecta, corresponde a la proveedora del servicio (art. 44.1º) *"demostrar que la operaci6n de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que nose vio afectada por un fallo tecnico u otra deficiencia del servicio prestado..."*. Por otro lado, la proveedorea del servicio tambien tiene la carga de acreditar (art. 44.3º) *"que el usuario del servicio de pago cometi6 fraude o negligencia grave"*. Y, por ultimo, el registro de la utilizaci6n del instrumento por el proveedor no basta por si solo y necesariamente para demostrar que *"la operacion de pago fue autorizada por el ordenante, ni que este ha actuado de manera*





fraudulenta o incumplido deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus obligaciones [...] (art. 44.2°).

(iv) La responsabilidad de la entidad proveedora del servicio de pago se acentua aun mas cuando el proveedor no exige "autenticación reforzada" del cliente, supuesto en que este ultimo unicamente responde de haber actuado de forma fraudulenta (art. 46.2°). La autenticación reforzada se define en el art. 2.5 coma "*la autenticación basada en la utilización de dos o mas elementos categorizados coma conocimiento (algo que solo conoce el usuario), posesión (algo que solo posee el usuario) e inherencia (algo que es el usuario), que son independientes -es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los demas-, y concebida de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de identificación*". No se discute que, en el caso que nos ocupa, las operaciones controvertidas se ejecutaron con el sistema de autenticación reforzada.

3. Del analisis de la normativa expuesta resulta el establecimiento a cargo de la proveedora de los servicios de pago de un riguroso regimen de responsabilidad ante disposiciones no autorizadas, que solo cede con la demostración de la actuación fraudulenta o gravemente negligente del usuario, y que no solo conlleva una inversion de la carga de la prueba, sino que apunta tambien hacer las mecanismos de responsabilidad cuasi objetiva a los que se refiere la sentencia recurrida. Como apuntabamos en las sentencias precedentes de esta sala dicho regimen esta "*sin duda inspirado en la idea de que las beneficios que comporta (tanto para el trafico económico, coma para la actividad del proveedor de los servicios) el avance tecnológico en los instrumentos de pago, debe estar justamente compensado con la protección reforzada de quien los emplea y se ve expuesto a actuaciones fraudulentas [...]*"

4. La negligencia grave del usuario coma causa de exoneración de la entidad bancaria es tratada par la Directiva (UE) 2015/2366 en un sentido restrictivo. Segun su considerando 72 "[a] *la hora de evaluar la posible negligencia o la negligencia grave del usuario de servicios de pago, deben tomarse en consideración todas las circunstancias. Las pruebas de una presunta negligencia, y el grado de esta, deben*



evaluarse con arreglo a la normativa nacional. No obstante, si el concepto de negligencia supone un incumplimiento del deber de diligencia, la negligencia grave tiene que significar algo más que la mera negligencia, lo que entraña una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia. Un ejemplo sería el guardar las credenciales usadas para la autorización de una operación de pago junta al instrumento de pago, en un formato abierto y fácilmente detectable para terceros".

Como complemento a esta cualificación de la negligencia del usuario, el considerando 71 de la Directiva establece que *"una vez que el usuario de servicios de pago haya comunicado al proveedor de servicios de pago que su instrumento de pago puede haber sido objeto de uso fraudulento, no deben exigirse responsabilidades por las ulteriores pérdidas que pueda ocasionar el uso no autorizado del instrumento".*

Debe tenerse en cuenta, además, que la diligencia o negligencia del usuario no pueden ser confrontadas con el sesgo retrospectivo que da el conocimiento final de que las operaciones bancarias se cometieron con fraude. En otras palabras, el patron de referencia debe ser el de quien toma decisiones en la confianza de que el entorno informático en el que se mueve es el propio de su entidad bancaria. Si no se ha incurrido en una negligencia grave en el primer paso, las decisiones ulteriores deben ser valoradas desde la óptica de quien se cree en un entorno lícito y seguro, y no desde el conocimiento final de que ese entorno resultó ser fraudulento.

5. Esta misma configuración de la responsabilidad de la entidad proveedora de servicios de pago ha sido considerada por otras Audiencias Provinciales, como las que hemos citado en nuestras tres sentencias precedentes (sentencias de las Audiencias Provinciales de Lleida, Sec. 2a, de 29 de junio de 2023; La Rioja, Sec. 1a, de 17 de febrero de 2023; Almería, Sec. 1a, de 31 de enero de 2023; Madrid, Sec. 10a, de 13 de enero de 2023; Asturias, Sec. 5a, de 22 de junio de 2023, y las que en ellas se citan).

TERCERO.- Desestimación del recurso

1. La aplicación de este sistema normativo a los hechos que se han considerado probados conduce a la desestimación del



recurso de apelación, porque no se aprecia el error en la valoración de la prueba que en el denuncia.

2. En efecto, ninguna de las actuaciones que el banco apelante califica de gravemente negligentes pueden tener ese calificativo.

(i) El hecho de clicar en el enlace que contenía el SMS fraudulento ni siquiera es calificado por el apelante como una actuación gravemente negligente, sino solo negligente, con la afirmación de que este tipo de enlaces no son entornos seguros. En todo caso, no podemos compartir esta opinión por varias razones. En primer lugar, la distinción entre entornos seguros y no seguros requiere de ciertos conocimientos que no todos los usuarios poseen. Como resulta del informe pericial aportado por los demandantes y de las explicaciones de su autor en el acto del juicio, lo que distingue el protocolo seguro es que la URL contiene los caracteres HTTPS (frente a los no seguros: HTTP), así como la aparición del símbolo de un candado cerrado cuando la URL completa se ve en la barra de direcciones del navegador, y no todos los usuarios tienen la formación o la experiencia suficientes como para distinguir una y otra situación. En segundo lugar, se trata de una alegación un tanto ociosa, porque en este caso el enlace que contenía el SMS fraudulento estaba configurado con las características de un entorno seguro (<https://app.liberbank.es.me>).

(ii) El hecho de que el primer SMS fraudulento ofrezca una completa apariencia de licitud, por la forma en la que está redactado, y porque utiliza el identificador (ID) del propio banco para agruparse con el resto de los mensajes legítimos, justifica la actuación del usuario, de modo que el hecho de clicar en el enlace no constituye en modo alguno una negligencia grave. Como apuntábamos en la sentencia 142/2024, de 21 de marzo, se aprecia *"la imposibilidad para el cliente, o para su terminal telefónica, de percibir que se estaba ante un SMS fraudulento, dada la técnica utilizada de SPOOFING, pues el estafador utilizaba el propio ID de la entidad bancaria. Actuación la del cliente, por lo demás lógica ante la alerta, que se suponía enviada por el Banco, de que alguien no autorizado había entrado en su cuenta online"*.



(iii) Sobre la posible introducción de los datos de la tarjeta de crédito de la demandante, ya se ha explicado que no existe traza de tal actuación en la hoja Excel que recoge toda la operativa vinculada a su usuario el 8 de junio de 2022. Ciertamente, [REDACTED] mencionó tanto en la denuncia penal como en la reclamación presentada ante el Servicio de Atención al Cliente que había facilitado estos datos tras acceder a la aplicación fraudulenta, lo que luego ha explicado en el interrogatorio de parte como fruto de un error achacable al nerviosismo que la situación le produjo. Como quiera que fuera, ya hemos dicho que esta cuestión no es especialmente relevante, primero porque no se realizó ninguna operación de tarjeta de crédito, y, segundo, porque tampoco incurriría en el concepto de negligencia grave el hecho de facilitar los datos que pide la aplicación que el usuario considera que es la auténtica aplicación de su banco para evitar el bloqueo de la cuenta, precisamente porque de lo que se trata es de evitar ese bloqueo y de restablecer la operativa normal de dicha cuenta.

(iv) Sobre la autorización por la demandante de la vinculación de otro dispositivo móvil, se trata de una conducta que ya ha sido analizada en la sentencia 142/2024, de 21 de marzo, en estos términos:

"Nose advertía entonces, como pretende la apelante, de que se trataba de vincular otro dispositivo distinto, circunstancia que podría haber generado desconfianza en el cliente, sino que se hablaba solo de dispositivo, sin indicar cual fuera, de tal modo que lo que hubo de presumir este es que se trataba del propio, que había que vincular de nuevo dado el acceso no autorizado del que había sido informado. No es cierto, en consecuencia, que el demandante hubiera introducido la clave OTP necesaria para llevar a cabo la concreta operación, la transferencia indicada, sino que, una vez vinculado el dispositivo que utilizaba el ciberdelincuente, a este le serían remitidas las claves necesarias para las nuevas operaciones que deseara realizar, y no a quien aquí acciona.

En definitiva, este segundo paso venía precedido y motivado por el engaño ya consumado con el primer SMS, y estaba sin duda guiado por el ánimo de evitar lo que,



desgraciadamente, se perseguía con él, por lo que esa actuación no puede calificarse de temeraria ni gravemente negligente, sin que, como decíamos en la sentencia citada de 13 de diciembre de 2023, "pueda exigirse a quien resultó engañada mayor precaución que a quien debía poner las medidas necesarios para evitar el engaño".

(v) Es evidente que la actuación de la demandante estuvo enteramente condicionada por el engaño ya consumado con el SMS, y, como hemos advertido en casos similares, estuvo además guiada por el anhelo de evitar lo que, desgraciadamente, se perseguía con ella. Por ello, esa actuación no puede calificarse como gravemente negligente en el contexto de engaño consumado, sin que pueda exigirse al usuario que resulta engañado mayor precaución que a la entidad bancaria que debe poner las medidas necesarios para evitar el engaño.

3. En efecto, concurren datos plurales que apuntan a la responsabilidad del banco apelante. Es muy significativo que el conjunto de las operaciones trazadas en el documento Excel aportado con la contestación a la demanda no hiciera saltar alguna alerta o aviso que llamara a corroborar su autenticidad.

(i) Así, las transferencias fraudulentas fueron ejecutadas utilizando una operativa singular y completamente ajena a la que era propia de las demandantes.

(ii) Fueron realizadas por importes elevados, hasta el límite de lo permitido en un caso y por 1 € menos en el otro, como transferencias de ejecución inmediata, que no suelen ser las habituales en la operativa de un usuario medio, por el importe de las comisiones que conllevan.

(iii) Se realizaron además inmediatamente después de un cambio en el dispositivo móvil vinculado a la aplicación.

(iv) La vinculación de un nuevo dispositivo móvil fue posible porque el sistema empleado por la entidad bancaria no era especialmente seguro, por el texto equivoco del SMS enviado a tal fin y por la facilidad de que un SMS de este tipo no despierte las sospechas de los usuarios previamente alertados por un mensaje fraudulento de accesos indebidos a su cuenta online.





(v) La primera transferencia se realice despues de uno o varios intentos de ejecutar otra u otras operaciones por un importe superior, 12.000 €, intento que result6 frustrado por los limites de disposici6n de la cuenta.

(vi) La segunda transferencia se llev6 a cabo a los pocos minutos del cambio de fecha, cuando ya no estaba operative el limite diario de disposici6n de la cuenta. Esa segunda transferencia fue posible ademas porque el Servicio de Atenci6n al Cliente del banco demandado no bloque6 la cuenta, pese a tener ya conocimiento de la prirnera operaci6n, cuando ademas podia haber comprobado los intentos fallidos de realizar otras transferencias por un irnporte superior al autorizado diario. Ademas, las transferencias iban dirigidas a una cuenta de la entidad PFS Card Ireland Limited Sucursal en Espana, una entidad inusual en el trafico bancario, con conceptos tan llarnativos coma "*Rebellion*" [rebeli6n] y "*Numero del diablo*".

4. Este conjunto de circunstancias evidencia la falta de medidas de seguridad de los sisternas de detecci6n de fraude en la fecha en la que sucedieron los hechos o, coma minima, el fallo de las rnedidas irnplernentadas a tal fin, lo que queda ratificado por el elevado nurnero de operaciones fraudulentas concentradas en las mismas fechas, pues, como hemos apuntado en otras resoluciones, dificilmente puede sostenerse que un gran numero de usuarios hubiera incidido casi simultaneamente en una conducta gravemente negligente en sus interacciones con el banco.

CUARTO.- Costas

Las costas del recurso se imponen a la apelante (art. 398.1º LEC) .

En atenci6n a lo expuesto, esta Sala pronuncia el siguiente

FALLO

1. Desestirnamos el recurso de apelaci6n interpuesto por Unicaja Banco S.A. frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Lena el 20 de noviembre de 2023 en el juicio ordinario 517/2022.





2. Imponemos a la parte apelante las costas de esta segunda instancia.

3. Acordamos la pérdida del depósito constituido para su interposición, al que se dará el destino legal.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de casación, en los casos, par los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 477 y ss. L.E.C., debiendo interponerse en el plaza de veinte días ante este Tribunal, con constitución del depósito previsto en la D.A. 15 LOPJ.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de, los datos de, carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de, las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



PRINCIP_00 DJ
AsTURIAS